

Esto nos pone en situación de volver a tomar el hilo de los acontecimientos que titulamos como «El caso Schneider».

### *Un problema para EEUU*

Cuando a principios de 1964, el Pentágono norteamericano decidió poner un grado más de preocupación en sus relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas, estaba dando el primer paso para «reparar y reacondicionar» el deteriorado último baluarte de la dominación imperialista en Chile, en caso de que las «condiciones actuales continúen mostrando una tendencia al peligro de una subversión obrera y campesina en Chile».

Para los generales norteamericanos del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá (que funciona con un costo de 136,5 millones de dólares al año, con 12 generales y almirantes para 10.500 hombres), encargados de «proteger y administrar» los Programas de Ayuda Militar a América Latina, el «caso de Chile», en 1964, era el caso de «problemas en potencia».

La situación política y económica del país demostraba una tendencia a un serio enfrentamiento entre los trabajadores, por un lado, y los intereses de los grandes monopolios chilenos y yanquis por otro. Era el último año del período presidencial de un representante de los monopolios chilenos (Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa monopólica central de un conjunto empresarial chileno-norteamericano de más de 500 millones de dólares de capital social), con claras señales de descalabro económico: más de 46 % de inflación, después de haber tenido un índice de 8 % en 1961, de 14 % en 1962 y de 45 % en 1963. La cesantía superaba el 7 %, es decir, más de 200.000 desocupados sobre un total aproximado de 2.800.000 chilenos considerados como «fuerza de trabajo». La deuda externa llegaba a 1.896 millones de dólares (de los cuales 1.629 eran créditos ya utilizados y 267 millones en créditos todavía no utilizados). La tasa de mortalidad infantil era de 102,9 por cada mil niños nacidos vivos.

Las diferencias de condiciones de vida entre las distintas clases sociales eran brutales: 1.000.000 de campesinos y obreros vivían con 380 dólares anuales de ingreso; mientras 60.000 propietarios de latifundidos, empresas monopólicas y administradores gerenciales de las mismas, gozaban de un ingreso promedio anual de 10.450 dólares.

En términos estadísticos, en 1964 la situación era, según estudios de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) creada por la Administración Frei, la siguiente:

Los obreros constituían el 50 % de la fuerza de trabajo y recibían el 21 % del ingreso total.

Los empleados sumaban el 22,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 27,2 % del ingreso total.

Los trabajadores por cuenta propia, eran el 21,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 17,6 % del ingreso total.

En cambio, los contratistas y rentistas eran sólo el 1,4 % de la fuerza de trabajo y absorbían el 26,4 % del ingreso.

El resto del ingreso (7,9 %) correspondía al Gobierno, por sus propiedades e impuestos directos.

Estas desigualdades eran mucho más graves en el campo, donde trabajaba el 25 % de la población activa chilena. Allí, el 3 % de los propietarios agrícolas considerados como latifundistas, se apropiaban del 37 % del ingreso generado en el sector; mientras el 71 % de las familias que vivían en el campo recibían sólo el 33 % del ingreso del sector.

Para mantener esta realidad, los sucesivos gobiernos radicales y conservadores, entre 1945 y 1964, habían montado un aparato represivo militarizado (el cuerpo de Carabineros) que, cuando se veía sobrepasado por la lucha de los trabajadores, era apoyado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército. Sin embargo, la principal forma de «mantenimiento del orden» social era el engaño político y la supresión de las organizaciones sindicales. (Entre 1945 y 1964, la población sindicalizada chilena había disminuido en más de un veinte por ciento.)

En el engaño político, la situación se reflejaba en que la alianza de los partidos conservador y liberal (organización política pura de la oligarquía agraria, comercial y financiera), mantenía un 30 % de la fuerza electoral. El partido radical (formado por funcionarios del Estado y empresarios industriales ligados a las empresas norteamericanas del cobre, más algunos sectores latifundistas) mantenía un 20 % de esa fuerza electoral. La Democracia Cristiana, por su parte, que sólo a fines de la década del 50 comenzó a ser importante, tenía un 16 % de la fuerza electoral (era un partido desgajado, en los años 30, del partido conservador, y que, en 1964, estaba formado por la oligarquía industrial y por los técnicos de más alto nivel ligados a las empresas monopólicas tanto chilenas como norteamericanas).

Por su parte, la combinación de los partidos socialista y comunista, a principios de 1964, había llegado al 25 % del electorado, con una constante tendencia a aumentar sus simpatías entre los centenares de miles de trabajadores golpeados por la miseria y la cesantía, los cuales presionaban diariamente para obtener una ley de sindicalización campesina, mejoramiento de salarios, facilidades para crear sindicatos de obreros y empleados, reformas agrarias y lo más importante, la nacionalización de las minas del cobre, hierro y salitre en poder de empresas de los Estados Unidos, así como la nacionalización de los servicios telefónicos y de generación de energía eléctrica para la capital y la zona central, también en manos de empresas norteamericanas.

Así, la lucha presidencial de 1964, entre Salvador Allende (apoyado por una alianza socialista-comunista, más la mayor parte del partido radical a nivel de bases) y Eduardo Frei (jefe del partido demócratacristiano, más la alianza conservadora-liberal y un pequeño sector del partido radical), se dio en un contexto de una violenta campaña antiimperialista, un acuerdo generalizado sobre la urgencia de una ley de reforma agraria y una movilización de masas que no tenía precedentes en la historia del país. Incluso, los demócratacristianos, tomando la bandera del engaño político al pueblo, ya fracasados los radicales, los conservadores y los liberales, plantearon la necesidad de «una revolución», pero en «libertad», que proponía la expropiación del latifundio, la reforma bancaria, la expropiación de algunos consorcios industriales chilenos gigantes en manos privadas, la reforma tributaria y «un nuevo acuerdo» con las compañías del cobre Anaconda y Kennecott.

La situación amenazaba ser crítica para los grupos dominantes de la sociedad chilena, tanto norteamericanos como nacionales. Hasta ese momento, a partir de 1945, el Gobierno de los Estados Unidos y las empresas Anaconda, Kennecott, International Telephone and Telegraph y American Foreign Power, principalmente, habían manejado al Gobierno chileno y su Cámara de diputados y senadores, a través de sus empleados pagados en el partido conservador, liberal y, sobre todo, en el radical. El presidente radical Gabriel González Videla, por ejemplo, después que dejó la presidencia de la República en 1948, fue premiado por sus patrones norteamericanos de la Anaconda, la Kennecott, la Anglo Lautaro y la Ford Motor, a quienes había protegido durante su Administración, nombrándolo presidente de

la filial chilena de Radio Corporation of America, y vicepresidente del Banco Francés e Italiano. Así, entre 1948 y 1964, este Gabriel González Videla había pasado de ser un abogado sin ninguna fortuna, a uno de los hombres más acaudalados de Chile, solamente recibiendo el pago de sus servicios prestados desde La Moneda al Gobierno y a las empresas de los Estados Unidos. Otro caso típico es el del hombre más importante de la directiva del radicalismo en esos mismos años: Rodolfo Michels. Michels era el encargado de «administrar» los fondos que la Anaconda Company aportaba anualmente para «financiar» al partido radical. Todos los proyectos de leyes sobre «inversión extranjera», trato tributario a las empresas del cobre, hierro, salitre, teléfonos y electricidad, antes de ser presentados al Congreso por los Gobiernos radicales y los que los siguieron, eran discutidos primero en las oficinas de la Anaconda Chuquicamata. Cuando Michels «se retiró» de la vida política y fue nombrado vicepresidente de la Anaconda en Chile, fue reemplazado por el «tesorero» del partido radical, Constantino Tallar, el cual, al mismo tiempo, era «contratista» de los trabajos habitacionales y de construcción de la Anaconda.<sup>2</sup>

En 1964, con el radicalismo fragmentado, con fuerte tendencia de las bases a sumarse a la combinación de izquierdas que apoyaba a Salvador Allende, el Gobierno de los Estados Unidos y sus empresas multinacionales estaban en un problema: ¿a través de quiénes manejar el Gobierno de Chile, si ya los radicales no tenían ninguna «chance» de constituir un grupo coherente con real acceso a La Moneda y al Parlamento? Se pidieron informaciones a Chile y Robert Haldeman, presidente de la Braden Copper (filial de la Kennecott), explotadora del mineral de cobre de El Teniente, en la provincia de O'Higgins, explicó cómo, a fines de 1963, había sostenido conversaciones con Eduardo Frei (abogado al servicio del grupo oligarca Osvaldo de Castro, estrechamente ligado al consorcio yanqui Anglo Lautaro), jefe de la Democracia Cristiana, candidato presidencial ya entonces para las elecciones de septiembre de 1964; el cual había pedido «ayuda financiera» a la Kennecott para la campaña presidencial, a cambio de una promesa formal de «no nacionalizar las minas de cobre» y de «pactar un acuerdo técnico» que «beneficie mutuamente tanto a Chile como a la Kennecott». Haldeman informó a su Gobierno que «es mi opinión» que Eduardo Frei es «una persona de confianza», que «cree en lo que dice». El informe de Haldeman, agregado al de la Anglo Lautaro y de la

propia International Telephone and Telegraph (ITT), en cuyo equipo ejecutivo figuraba uno de los hombres más importantes de la directiva de la Democracia Cristiana, Guillermo Correa Fuenzalida (a su vez, principal ejecutivo del grupo oligárquico-financiero-industrial del Banco de Chile, que manejaba un capital social de más de 600 millones de dólares), decidió al Gobierno de los Estados Unidos a formar, con ayuda de las empresas interesadas en «los sucesos de Chile», una caja electoral para la campaña presidencial de Eduardo Frei en 1964.<sup>3</sup>

Se reunieron VEINTE MILLONES DE DÓLARES, administrados por la AID (Agencia Internacional para el Desarrollo, del Gobierno de Washington), para financiar la campaña electoral de Eduardo Frei. El acuerdo fue ceder a la presión popular para una reforma agraria, sindicalización campesina y llegar a «nuevos acuerdos» que aparentaran nacionalizaciones, con la Anglo Lautaro para el salitre, la American Foreign Power para la electricidad, la ITT para los teléfonos y la Anaconda y la Kennecott para el cobre. Como «consejero» económico para «garantizar las medidas en favor del capital procedente de los Estados Unidos», se nombró a David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, y como «coordinador» entre los Rockefeller y Eduardo Frei, al ingeniero Raúl Sáez, de la Corporación de Fomento de la Producción (este Raúl Sáez, desde abril de 1974, es «asesor económico» de la Junta Militar que gobierna en Chile).<sup>4</sup>

Los veinte millones de dólares no fueron una mala inversión para los Estados Unidos. Eduardo Frei ganó las elecciones presidenciales con el 56 % de los votos emitidos. Pero Salvador Allende elevó su cuota de votación, de más o menos el 25 %, al 39 %. Esto preocupó mucho a los «sociólogos» de la American University de Washington (centro de estudios superiores administrado por el Pentágono para sus necesidades de dominio mundial), y recomendó una serie de medidas para «evitar el peligro de subversión popular en Chile». Las medidas estaban centradas en una readecuación de la capacidad de las Fuerzas Armadas chilenas para hacerse cargo de la situación en una «circunstancia extrema».

Los generales norteamericanos ordenaron a la Fundación Ford que hiciera uso de su control de algunas universidades norteamericanas y sudamericanas para iniciar un estudio científico de los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas. El sociólogo Roy Hansen, de la Universidad de California, optó por realizar una memoria de graduación sobre el tema. Al mismo

tiempo, en la American University, se iniciaron los estudios para realizar una investigación masiva, en profundidad, de la sociedad chilena, inserto en lo que se llamó el «Proyecto Camelot.»<sup>5</sup>

A fines de 1964, Roy Hansen llegó a Chile, se conectó con Alvaro Bunster en la Universidad de Chile, el cual después sería enganchado para el «Proyecto Camelot» (curiosamente, Alvaro Bunster fue embajador de Chile ante Gran Bretaña en la Administración de Salvador Allende) y a través de la hermana de Bunster, Ximena, obtuvo el *statu* de sociólogo-investigador. Pero el centro de las operaciones científicas de Hansen, naturalmente, estaba en las Fuerzas Armadas chilenas. Para operar allí se conectó con el secretario general de la Academia de Guerra del Ejército chileno: ¡coronel René Schneider Chereau! El coronel Schneider permitió al norteamericano Hansen el acceso ilimitado a la biblioteca de la Academia de Guerra, a sus planes de estudio y a entrevistas personales con el cuerpo de generales.

Al avanzar en su estudio, Hansen se encontró con que el Ejército chileno tenía una superestructura destinada a una tropa inmensamente mayor a la que manejaba (un general por cada mil hombres, es decir 32 generales para 32.000 hombres más o menos, y un coronel por cada doscientos hombres). Del mismo modo, vio que «la fuerza decisiva» en el aparato militar de mi país era el Ejército. Concentró, entonces, su investigación en él con la preciosa ayuda del entonces coronel René Schneider Chereau. El resultado del trabajo de Hansen, considerado «secreto» para el Ejército chileno, se llamó *Cultura Militar y Declinación Organizativa: un Estudio del Ejército de Chile*. Una copia de su estudio ingresó al sector «clasificado» de la biblioteca de la Academia de Guerra del Ejército chileno; otra copia quedó en la Biblioteca de Sociología de la Universidad de California y el resto de las copias pasaron al Pentágono.

Años más tarde, en 1969, algunos periodistas chilenos tuvieron acceso a la copia «clasificada» existente en Chile, y un detalle de su contenido puede leerse en la edición número 21 de julio-agosto de 1971, de la revista «Causa MI», editada en Santiago de Chile.

La síntesis del trabajo financiado por la Fundación Ford y también por la Rand Corporation, podría ser esta:

En 1964, para Roy Hansen, las Fuerzas Armadas chilenas estaban en evidente peligro de desintegración a causa de su absoluta falta de participación en las decisiones importantes del país. Decía el sociólogo yanqui que, a pesar de que la opinión de las

Fuerzas Armadas chilenas había sido decisiva para el desarrollo político del país, desde hacía cuarenta años se les estaba utilizando sólo como «fantasma aterrador», pero, al mismo tiempo, relegándolas a un papel indecoroso de guardianes de tercer orden del sistema imperante y, lo que es más, colocándolas en un quinto o sexto lugar en cuanto a nivel económico. Decía que, desde el golpe militar de 1924 (dado por la guarnición de Santiago para obligar a la mayoría oligárquica del Parlamento a aprobar leyes de reformas en los salarios y sistemas de previsión y salud de los obreros, a fin de impedir una «insurrección bolchevique» de las masas), los militares chilenos no habían tenido necesidad de intervenir activamente en política, y eso los había ido relegando al cuarto de los trastos inútiles por parte de las sucesivas Administraciones.

Señalaba Hansen que había un enorme peligro de desintegración de la estructura militar chilena, lo cual hacía «prever» que los altos mandos, para defenderse del naufragio, tendrían una marcada tendencia, en el futuro próximo, a tener una participación activa en política y en las decisiones nacionales de los círculos dominantes.

Investigando sobre qué pensaban los generales del resto de la sociedad en que vivían, llegó a algunas conclusiones:

Un profundo desprecio por los civiles, a quienes los generales consideraban inútiles, corrompidos e ignorantes. Algunos generales opinaron que los parlamentarios, los políticos civiles y muchos funcionarios de alta jerarquía del Estado «no tienen idea de lo que es Chile, cómo hay que defenderlo de las agresiones externas y de la subversión», «son ignorantes», «y también incapaces de llevar a cabo cualquier tarea difícil». Los generales también opinaron que «La Patria» sólo puede ser defendida por las Fuerzas Armadas; los políticos civiles son incapaces. Que los civiles desprecian a los militares, pero recurren a ellos cuando sienten que no pueden frenar la «subversión del populacho». Sobre las opiniones políticas de los altos mandos, las estadísticas de Hansen fueron concluyentes: 10 % de derechas, 80 % de centro y 10 % de izquierdas. Pero, con la aclaración de que, para los altos mandos militares chilenos, «izquierdas» significaba el programa de reforma agraria, bancaria y nuevo trato con las empresas norteamericanas, de la Democracia Cristiana dirigida por Eduardo Frei. Así, para los generales, la combinación de partidos que había apoyado a Salvador Allende, era de «extrema izquierda» y no contaba con ninguna simpatía entre ellos.

Cuando, durante la primera mitad de 1965, el Pentágono quiso poner en práctica en la segunda parte de su proyecto de largo plazo de «preparación» de las Fuerzas Armadas chilenas como reserva para mantener la estructura de la sociedad burguesa chilena en caso de catástrofe de los políticos civiles, hubo problemas serios. Esa segunda parte era el «Proyecto Camelot», que tenía la intención de estudiar, clasificar y ponderar todos «los elementos de presión social, política y económica contra el sistema establecido» para lograr «un sistema de control de esas presiones». Cuando se iba a comenzar a aplicar, los militantes de partidos de izquierda de la Universidad de Chile lo denunciaron. El escándalo fue tan enorme que la propia Democracia Cristiana, para cubrir las apariencias, apoyó una investigación del caso en el Parlamento. Los parlamentarios de izquierdas más un sector de demócratacristianos, calificaron el «Proyecto Camelot» como «un plan de espionaje de una potencia extranjera en contra de Chile», y el propio Gobierno de Washington tuvo que declarar, en junio de 1965, que «hemos sugerido a las autoridades correspondientes que se suspenda la aplicación del «Proyecto Camelot» en Chile y «en Colombia».

Pero el trabajo en las Fuerzas Armadas chilenas no se suspendió. Las misiones militares de los Estados Unidos (que tienen su sede en el propio edificio del Ministerio de Defensa de Santiago, vedado a los civiles chilenos) iniciaron una «asesoría a presión» sobre los planes de estudio de la Academia de Guerra, y recomendaron que todos los alumnos del último curso de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins (que prepara oficiales para el Ejército) y de la Escuela de Aviación Capitán Avalos (que prepara oficiales para la Fuerza Aérea), deberían pasar un período de instrucción de cuarenta días en los fuertes del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en la Zona del Canal de Panamá.

Esta «recomendación» del Pentágono al alto mando militar chileno, fue puesta en práctica en 1968 por el entonces director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins y ya «hombre de confianza» del Pentágono en el Ejército chileno: ¡el general de brigada René Schneider Chereau!

Al mismo tiempo, Schneider, que era profesor de la Academia de Guerra, participaba activamente en la introducción de nuevas cátedras, que tenían que ver con economía política, administración estatal, comercio exterior, políticas de industrialización, historia de los partidos políticos chilenos, reforma agraria, reforma

urbana, políticas bancarias, etc. Es decir, todo un plan de preparación de «administradores públicos», como parte importante de la instrucción de los nuevos generales del Ejército chileno. Del mismo modo, se introdujeron cátedras intensivas de estudios de «marxismo» a través de cursos sobre Marx, Lenin y Mao Tse-tung.<sup>6</sup>

Desde 1968, el propio «profesor René Schneider», después de largas sesiones de trabajo con los miembros de la misión militar norteamericana en Santiago, comenzó a desarrollar la «teoría moderna de la seguridad nacional», que consistía en sostener que el verdadero significado de que «las Fuerzas Armadas son la garantía de la seguridad nacional» tiene un doble carácter: la de seguridad con respecto a los enemigos externos, y la de seguridad con respecto a los enemigos internos, y que, en las «condiciones actuales de Chile», los enemigos «internos» de la seguridad nacional son mucho más peligrosos, reales y latentes que los enemigos «externos»: Y, ¿quiénes son esos enemigos «internos»? Según la teoría del Pentágono, vía general René Schneider, son todos aquellos que, aprovechándose del descontento popular a causa de injusticias sociales y abusos de los poseedores de la riqueza, tratan de sacar a Chile del mundo «occidental y cristiano» en que nació y está destinado a seguir viviendo. Entre esos enemigos «internos», por supuesto, se inscriben con honores los «que propician el socialismo marxista».

Cursos similares y teorías semejantes se desarrollaban, al mismo tiempo, en la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros. Todos a cargo de «asesores norteamericanos de Inteligencia» y todos a través de altos mandos del tipo del general de brigada René Schneider Chereau.

Sin embargo, mientras el Pentágono daba primera prioridad en Chile al mejoramiento de sus relaciones con las Fuerzas Armadas nativas, el propio Gobierno de Eduardo Frei, demasiado ocupado en pavimentar el camino de los buenos negocios de las empresas gigantes de los Estados Unidos, no escuchaba las peticiones materiales de sus generales que, insuflados de un nuevo espíritu después de tres años de comenzar a adiestrarse para ser «maestros en el arte militar y en el arte del gobierno civil», exigían una mayor participación en el reparto de las riquezas generadas por el trabajo de los obreros y campesinos chilenos.

En 1969, comenzó a dibujarse con claridad una nueva situación crítica, social y económica. Transcurridos cinco años ya de la llamada «revolución en libertad» de Eduardo Frei, era no-

